

Los beneficios de la máscara

5

Recuerdo aquella mañana. Amanecía 1979. Mi primera reacción fue de incredulidad. Estábamos acostumbrados al tipo de acciones de las FARC que han sido muy cuidadosas en no tocar fibras sensibles, de pronto sucede una emboscada en algún vericuetto de la selva... no nos llegan tan al alma. Cuando se llevaron las armas, nuestra reacción fue grande, dolorosa, pero también nos produjo el conocimiento de que para vivir en un estado de guerra hay que hacer conciencia de que se está en guerra,

dijo un general de tres estrellas (Behar, 1985). En los cinco días que siguieron al clamoroso hurto del Cantón Norte fueron realizadas un millar de pesquisas que condujeron a la detención de 646 personas, entre militantes y meros simpatizantes del M-19. La primera vergüenza fue lavada con sangre. “Creo que hubo un afán de cerrar la herida causada”, afirmó un alto oficial. Por su parte, Turbay había sido categórico con los generales: “Ustedes en un mes me recuperan esas armas, hagan lo que tengan que hacer, pero las armas hay que recuperarlas”. El ejército obedeció, haciendo cuanto fue necesario.

Mientras la tortura se volvía sistemática, no faltaba quien hacía bromas sobre ello. Hernando Santos, propietario y director de *El Tiempo*, escribió en una editorial: “Me encantan las tapaditas, pero no tanto como las torturas” (Behar, 1985). Entre tantos otros, fue arrestado el responsable de la operación del Cantón Norte, el actor y director de televisión, Carlos Duplat, llamado don Isidro por los compañeros del Eme.

Llegamos a un lugar frío y húmedo que parecía una caverna. Allí me desnudaron, y me vendaron los ojos, me subieron encima de una mesa, me ataron las manos atrás y luego quitaron la mesa quedándome suspendido en el aire. Ahí comenzó la paliza. Recuerdo que inicialmente me separaron las piernas y alguien me golpeaba los testículos, creo que como con un cepillo de los que utilizan para lavar caballos. Un rato me tenían colgado y me golpeaban, otro rato me bajaban, oí los gritos de otras personas; me decían que tenían familiares míos ahí,

recordó más tarde Duplat. Las técnicas de tortura se hicieron más refinadas cada vez. A los 18 días, tras quitarle las calzas de los dientes, comenzaron a barrenarle en las caries abiertas. Duplat se rindió. “Les dije lo que ellos querían que les dijera”.¹ Cuando descubrieron el escondrijo del arsenal, los pocos compañeros todavía libres solamente habían conseguido distribuir una parte de las armas a los comandos. La revista *Alternativa* dedujo sarcásticamente que no había en todo el país 7.000 personas “dispuestas a empuñar todos aquellos fusiles”. Amnistía Internacional comenzó a denunciar la represión existente en el país: en su informe de 1980 recogieron 6.000 casos de tortura. El presidente Julio César Turbay manifestó que los prisioneros se “autotorturaban” para denigrarlo. En las paredes de Bogotá apareció escrito: “Ayuda a la policía. Tortúrate tú mismo”. Entre el Eme y el ejército estalló una guerra abierta. Dos dirigentes detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá recibieron una carta con el membrete del Ministerio de Defensa que decía:

Ustedes desde la cárcel planean el desarrollo de distintos hechos violentos, atentando contra la vida y los bienes de las personas. En días pasados, después de cometer un robo, intentaron asesinar a un coronel del ejército. Si el atentado hubiera tenido éxito, los principales cabecillas del M-19 recluidos en La Picota hubieran tenido que afrontar idénticas consecuencias. Mediten sobre esta advertencia antes de disponer en lo sucesivo acciones similares contra el personal militar.

Los jefes del Eme eran conscientes de haber dado un paso más largo que la pierna. “Hasta ahí éramos la pureza en chanclas. Entonces viene el enfrentamiento inevitable con el ejército” dijo en una entrevista Jaime Bateman, número uno de la organización. A la propaganda del gobierno que lo daba por aplastado, el movimiento respondió con la consigna “El

1. *El Tiempo*, 21 de noviembre de 2001.

M-19 ni se calla, ni se aísla, ni se rinde”, que apareció de pronto en las paredes de las ciudades, en las universidades y en las fábricas, pero sobre todo en los bares y discotecas. Los rebeldes parecían multiplicarse. Cuando no atacaban cuarteles o puestos policiales, realizaban incursiones audaces, como la del museo de la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, donde robaron el bastón de mando del Libertador.

En todo caso, era la suerte de los detenidos lo que más preocupaba a los dirigentes del Eme. Mientras Turbay continuaba con sus ironías (“el único prisionero político en Colombia soy yo”, dijo en una visita diplomática a Italia), más de 400 guerrilleros eran sometidos a un cruel régimen en las cárceles. El 27 de febrero de 1980, un comando asaltó y tomó, tras un tiroteo de varias horas, la embajada dominicana en Bogotá, secuestrando a una docena de embajadores, entre quienes se hallaba el de Estados Unidos. Se trataba de otra acción que lindaba con la locura. “Es posible que puedan morir todos ustedes y por ello la Dirección permite, por primera vez, que hoy cada uno piense de nuevo si quiere participar”, se había dicho a los 16 rebeldes antes de entrar en acción. El M-19 exigió inicialmente la liberación de todos los compañeros encarcelados. Al cabo de 61 días de negociaciones extenuantes, el comando se contentó con un millón de dólares y poder tomar un avión para Cuba, tras haber alcanzado el aeropuerto de Bogotá entre dos hileras de gente que les festejaba.

Reforzado por los éxitos en las ciudades, el Eme decidió operar en las regiones meridionales donde, mientras tanto, habían despertado las FARC, que entre 1979 y 1983 habían aumentado sus frentes de 9 a 27. En su séptima conferencia, realizada en mayo de 1982, el grupo de Tirofijo decidió adoptar una estrategia más ofensiva, intensificando las emboscadas y los asaltos en las ciudades. El nuevo clima favoreció asimismo la resurrección del ELN. Aunque su estructura militar había quedado diezmada, el recuerdo de Camilo Torres seguía vivo en la memoria de muchos dirigentes populares y sindicales. En la primera reunión del grupo fue elegido secretario otro religioso, el ex sacerdote español Manuel Pérez.

Mientras ejército y guerrilla combatían, la progresiva consolidación de un nuevo sujeto, la mafia de la droga, contribuyó a complicar más el ya violento escenario colombiano. La marihuana y la coca no habían sido hasta los años sesenta más que plantas sagradas y curativas de los indígenas y campesinos de muchas regiones del país. Posteriormente se produjo la invasión de la costa atlántica por parte de jóvenes estudiantes de los Cuerpos de Paz, destinados a divulgar los valores de la sociedad norteamericana pero que, según el embajador colombiano en Estados Unidos, Víctor Mosquera “enseñaron a los aborígenes los procedimientos

químicos de la droga". Entonces se multiplicaron por las riberas del Urabá las plantaciones de marihuana, que era embarcada entre los racimos de banano, con la complicidad de aduaneros y policías. Más tarde fueron trasladadas las plantaciones al paraíso natural de la Sierra Nevada de Santa Marta que, con sus 5.770 metros, era la más alta cadena montañosa tropical del mundo asomada al mar. Las múltiples ensenadas constituían perfectos embarcaderos naturales, mientras el cercano desierto de La Guajira era ideal para equipar pistas clandestinas de pequeños aviones. Durante años, la marihuana producida en la Sierra, la "Santa Marta Gold", pobló el mundo hippie con el eslogan "fume colombiano, fume mejor". A lo largo de la costa atlántica aparecieron contrabandistas locales y jóvenes norteamericanos que viajaban con maletas Samsonite, repletas de dólares, que hicieron historia hasta el punto de que todavía hoy, en algunas regiones de Colombia se dice "pago Samsonite" para indicar dinero corriente. Bastaba un puñado de dólares para comprar el silencio de las autoridades. En los primeros años ochenta, los aeropuertos internacionales de las principales ciudades, desde Barranquilla hasta Santa Marta, padecieron extraños apagones justamente cuando partían grandes cargas dirigidas a Estados Unidos. El tráfico de la marihuana y del contrabando era controlado por unas pocas familias de la costa.

La fiesta concluyó cuando un sobrino de Julio César Turbay fue acusado de comerciar con droga. No era la primera mancha del nuevo presidente colombiano. Algunos periódicos habían revelado para esas fechas sus lazos con los mafiosos de esmeraldas. El gobierno de Estados Unidos aprovechó la situación para imponer a Turbay la firma de un tratado de extradición que permitía encerrar en cárceles norteamericanas a los narcos colombianos, y el compromiso de arrancar las plantaciones de marihuana de la Sierra Nevada. Más de 10.000 soldados invadieron la región, matando o deteniendo a centenares de indígenas y campesinos, mientras la aviación quemaba, a la par que las plantaciones, miles de hectáreas de reserva natural. A partir de mediados de los años sesenta, los campos de marihuana se desplazaron sobre todo a Estados Unidos y Jamaica. A lo largo de la costa colombiana quedaron solamente campos y ríos envenenados, junto con la criminalidad, la corrupción y el desempleo generados por el negocio de la droga.

Muchos colombianos caían ahora en la cuenta del beneficio que producían aquellas actividades, por ilegales que fueran. En 1981, la revista *Newsweek* escribía: "En América Latina se está construyendo un mundo sobre las bases de la costumbre a la marihuana, debido a la negligencia y tolerancia de los gobiernos locales". Los primeros en percibirlo fueron al-

gunos habitantes de Medellín, llamados “paisas”, educados en el principio de “por la plata lo que sea”. El hecho de que la cocaína acabara en las narices de los jóvenes norteamericanos no enternecía, desde luego, a los cientos de miles de pobres campesinos, muchos de ellos fugitivos de la violencia. Así es como empezaron a sobrevivir de la droga, trabajando en los campos y en los laboratorios. Se notaba simpatía y hasta admiración por los mafiosos que empezaban a surgir.

Las fortunas, grandes o pequeñas, siempre tienen un comienzo. La mayoría de los grandes millonarios de Colombia y del mundo han comenzado de la nada. Pero es precisamente esto lo que los convierte en leyendas, en mitos, en un ejemplo para la gente. El hacer dinero en una sociedad capitalista no es un crimen sino una virtud,

dijo Pablo Escobar en una de sus primeras entrevistas (Child y Arango, 1985).

Hijo de un mayordomo y de una maestra rural, Escobar se metió a robar y desguazar automóviles apenas acabado el bachillerato. En 1975 la policía colombiana de frontera lo vigilaba ya por narcotraficante. Un año más tarde pasó tres meses en prisión por haber introducido 33 kilos de cocaína en Ecuador. Para salir limpio de pruebas, provocó una impresionante estela de sangre y terror, haciendo desaparecer documentos y testigos, eliminando agentes y amenazando a jueces. Don Pablo comenzó a invertir sus ganancias en finca raíz, en terrenos situados en las zonas más fértiles del país y en algunos pequeños aviones, conocidos como de turismo en el resto del mundo pero que en Colombia se les llama “de coca”. Durante un viaje a Estados Unidos se dio cuenta que el paso de la cultura *hippie* a la *yuppie* significaría el *boom* de la cocaína. Era necesario unir las fuerzas para formar un cartel que estuviera en condiciones de responder a una demanda cada vez mayor de droga. Y había que asegurar la materia prima tratando con los narcos de otros países andinos, construir megalaboratorios para refinar, y organizar una red de distribución capaz de llegar a las grandes ciudades norteamericanas y europeas.

Los narcodólares empezaron a entrar en Colombia, con la mediación de los dirigentes sin prejuicios del Banco de la República. Toda la clase política y económica se benefició de una masa monetaria que ya en 1983 representaba la mitad de las transferencias del exterior. Cuando invirtió en la región agrícola del Magdalena Medio, Escobar conoció a Gonzalo Rodríguez Gacha, destinado a convertirse en el otro capo del cartel de Medellín. Don Gonzalo era un hombre ambicioso y violento que, después de haber trabajado como recolector de café, camarero y guardaespaldas de

un mafioso de la zona, se había marchado durante seis meses a la jungla amazónica del Guaviare, cerca de la pequeña ciudad de Mapiripán, para aprender los secretos del cultivo y la refinación de la coca. Rodríguez Gacha se movía con la autoridad de un rey, reclutando a los mejores cocineros peruanos en las refinerías y pagando a los camioneros más experimentados en el transporte de pacas de cocaína. Se conducía como un industrial perspicaz. Además de un buen sueldo, aseguraba a sus hombres la asistencia sanitaria y el descanso semanal con diversión garantizada, ya que los camiones regresaban a la zona llenos de cajas de alcohol y de prostitutas. Lógicamente, puso asimismo en nómina a un grupo cada vez más numeroso de pistoleros y trató de ganarse la protección del ejército y de la guerrilla. Para pasar sus cargamentos de coca bastaba con disipar a los militares emplazados en San José del Guaviare “un obús de millones de pesos” como se decía en la jerga. Con el III frente de las FARC, por su parte, don Gonzalo tuvo que firmar un pacto de no beligerancia, basado en el denominado “impuesto al gramaje”, y que consistía en pagar a la guerrilla 80 pesos por cada gramo de cocaína refinada.

Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha estaban destinados a unir sus vidas. Ambos eran aficionados al fútbol y se habían convertido en dueños, como muchos sabían, de los dos equipos más fuertes del país, el potentísimo Nacional de Medellín y el Millonarios de Bogotá, donde había jugado años antes el mismo Alfredo di Stefano. Atraído por el escenario político, Escobar había hecho carrera dentro del Partido Liberal liderado por el senador Alberto Santofimio, apodado significativamente Santomafio, logrando ser elegido representante en 1982. El jefe buscaba sobre todo garantizarse la inmunidad parlamentaria. Rodríguez Gacha, nacido en la ciudad de Pacho, Cundinamarca, prefería, por su parte, financiar las campañas del Partido Conservador. Solía participar en los comicios al lado de los grandes capos conservadores, como el ex presidente de la república Misael Pastrana y el enemigo fanático de las “repúblicas independientes guerrilleras”, Álvaro Gómez. La pertenencia a dos partidos diferentes no significaba problema alguno. Tanto don Pablo como don Gonzalo sabían que eran perfectamente intercambiables e igualmente corrompibles. Para conquistar el apoyo popular y convertirse en el “Robin Hood paisa”, Escobar financió la construcción de iglesias, casas para necesitados y campos de fútbol para los muchachos de los barrios más pobres. En su periódico *Medellín cívico*, Escobar afirmaba que compartía con los guerrilleros “el deseo de una Colombia con mayor igualdad social”. Rodríguez Gacha, por el contrario, había empezado ya su guerra personal con los rebeldes.

Cuando en noviembre de 1981 un comando del M-19 secuestró en el campus de la Universidad de Antioquia a Martha Ochoa, la hermana de tres capos del cartel de Medellín, tanto Escobar como Rodríguez Gacha acudieron en ayuda de sus socios. Los guerrilleros exigieron un rescate de 15 millones de dólares. Hasta entonces los narcos, a quienes molestaban las investigaciones sobre el origen de sus fortunas, habían accedido y pagado siempre. En aquella ocasión, sin embargo, los Ochoa se rebelaron convocando en su hacienda cercana a Medellín a los jefes de todos los clanes del país, que decidieron financiar un ejército común de matones.

Carlos Lehder, un extravagante mafioso filonazi, famoso por haber transformado una isla de las Bahamas en escala de los aviones de la droga dirigidos a Florida, fue el encargado del lanzamiento propagandístico de la nueva organización de la muerte, llamada MAS, abreviación de "Muerte a secuestradores". Lehder, que en 1987 fue vendido por el cartel de Medellín a la Drug Enforcement Agency (DEA) para acabar más tarde como testigo de la acusación contra el dictador panameño Manuel Noriega, hizo las cosas a lo grande. Utilizó un bimotor blanco para lanzar en el estadio de Cali, durante el partido más importante de la liga colombiana, entre el América, equipo local, y el Nacional de Medellín, miles de pasquines que anunciaban el nacimiento del MAS.

"La publicidad de siempre", pensaron los aficionados. Sin embargo, los pasquines con los bordes negros y una cruz a la derecha informaban que 223 personas "de bien" –que en realidad eran mafiosos, contrabandistas, comerciantes de esmeraldas y latifundistas–, habían determinado promover una nueva guerra en el país. El mensaje era elocuente. "Los secuestradores serán ejecutados en público; serán colgados en lugares públicos o ejecutados por pelotones de fusilamiento". Los promotores del jefe solicitaban la colaboración de los ciudadanos. "Por favor no rompa este comunicado. Péguelo en una parte visible; en su oficina, negocio, fábrica o sitios de especial reunión, o páselo a un amigo. Colabore". Era el 3 de diciembre de 1981, una fecha que significó un giro en la historia de Colombia.

Muchos promotores de MAS pretendían solamente protegerse contra los rebeldes. Pero la intención de otros era atacar a los guerrilleros para granjearse la tolerancia del Estado frente a sus negocios. En los días que siguieron a aquel fatídico 3 de diciembre, sobre todo en Medellín y Cali, comenzaron a aparecer cadáveres llenos de plomo en las calles, y de agua a lo largo de las orillas de los ríos, e incluso colgando de las farolas, en pleno centro de la ciudad. Eran supuestos guerrilleros. Todos tenían al

cuello un cartel que decía “Soy un secuestrador”. El ritual que sucedía después de cada asesinato –noticias rutinarias en la prensa, investigaciones carentes de empeño por parte de la policía y condenas formales de algunos exponentes políticos pronunciadas ante aquella mortandad– dejaba traslucir cierta simpatía de las autoridades y poderes fácticos ante aquellos métodos de lucha sin prejuicios contra la delincuencia política.

Los guerrilleros utilizaron también un avión para denunciar el nuevo pacto paramilitar. El 27 de enero de 1982, ocho hombres y una mujer del comando Luis Javier Cifuentes, nombre de un dirigente sindical asesinado unos días antes, asaltaron un avión de línea con 128 pasajeros a bordo. Tras una negociación llevada a cabo sobre la pista del aeropuerto de Cali, el grupo de asaltantes liberó a todos los pasajeros para tomar luego un pequeño avión que los llevó hasta Cuba. Concluido el secuestro, el M-19 acusó al ejército de dirigir a los matones del MAS con un método “utilizado por los militares en muchos otros países de América Latina que les permite actuar con libertad, sin que la imagen de las Fuerzas Armadas se deteriore”.

A pesar de los reveses sufridos tras el hurto del arsenal del Cantón Norte, el Eme conservaba todavía un papel protagonista, que le granjeaba las simpatías de un pueblo extenuado por la miseria y la represión. La guerra entre los masetos y el Eme se prolongó en emboscadas, homicidios y delaciones mutuas. Cuando los matones de los mafiosos no podían actuar solos, indicaban a los militares los escondrijos de los guerrilleros o de sus parientes y amigos. Los guerrilleros, por su parte, se vengaban haciendo descubrir cargas de droga. Para frenar la carnicería contra sus militantes, el M-19 liberó a Martha Ochoa el 16 de febrero de 1982. Desde entonces los guerrilleros comprendieron que tenían de frente un nuevo poder, aguerrido y sanguinario. Y trataron, en lo posible, de no provocarlo más.

La experiencia del MAS inspiró a su vez a las jefaturas del ejército, que se veían cada vez más incapaces de contener la rebelión. Las Fuerzas Armadas habían continuado editando manuales sobre la “guerra de baja intensidad”. En el remitido por el Comando General del Ejército en 1979 a los comandantes de compañía, se recomendaba “llevar a cabo operaciones de tipo irregular para localizar, capturar o destruir movimientos subversivos armados”, utilizando grupos de autodefensa. Hacía años que los militares practicaban por su cuenta el terror. En noviembre de 1975 la revista mensual *Alternativa*, de carácter progresista, había publicado una entrevista significativa en la que el director del DAS afirmaba que “en Colombia no hay comandos militares de derecha. Los elementos capaces de ejecutar estos actos no se encuentran sino dentro de los propios servi-

cios secretos del Estado. Los integrantes del Binci, por ejemplo, son duchos en esta clase de actividades. Todo esto con la evidente asesoría de la CIA en sus tareas de represión clandestina de los movimientos de izquierda". El Binci era la sigla del Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia del ejército colombiano, mejor conocido como XX brigada. Al año siguiente fue la misma revista del ejército la que publicó una apología de las operaciones clandestinas en un artículo titulado "El terrorismo como arma psicológica", en el que se afirmaba que "hay que combatir al terrorista con sus mismas tácticas". Aunque no se aconsejaba explícitamente en los manuales la eliminación física de los opositores mediante el homicidio extrajudicial y la desaparición forzada, ésta era practicada ampliamente.

Una vez que Turbay tomó posesión del Palacio Nariño, aparecieron casi diariamente cadáveres mutilados en los basureros de Bogotá. Al mismo tiempo recibían amenazas de muerte los abogados de los detenidos políticos y los críticos del Estatuto de Seguridad. Aparecían en las paredes escritos a favor de la guerra sucia, firmados por el grupo Alianza Anticomunista Americana, que recordaba a la organización terrorista Argentina del mismo nombre. El PCC acusó a los paramilitares del atentado que destruyó su sede en 1978. Sin embargo, se equivocaba. La llamada Triple A no era sino la máscara del Binci, dirigido ahora por el teniente coronel Harold Bedoya (*Tras los pasos*, 1995). Cuando los investigadores descubrieron que eran militares de rango medio y alto, incluyendo mayores y tenientes coroneles, quienes habían ordenado diversos homicidios, se pusieron en marcha los mecanismos de impunidad de la justicia militar y la solidaridad del cuerpo, que llenó de promociones y medallas a los imputados.

Los militares no eran nuevos en la guerra sucia, pero el nivel del enfrentamiento en que se hallaba el país exigía un salto cualitativo. Varios departamentos decidieron colaborar con los matones mafiosos o utilizaron la sigla MAS para consumo propio. O inventaron otras. Todo el país se llenó de pronto de cadáveres de hombres de izquierda y de nuevas siglas situadas a la extrema derecha, desde Caquetá al Magdalena Medio. A la Triple A y al MAS se añadieron el Movimiento Democrático contra la Subversión, el Movimiento Patriótico de Autodefensa Nacional, la Mano Negra, el Escuadrón del Machete y varios Muerte a los Comunistas, Muerte a los revolucionarios del Noreste, y Muerte a los Revolucionarios y a los Comunistas. Dado que no se castigaba ningún delito, la carnicería se difundió por todo Colombia como un deporte popular. Jóvenes fanáticos de las familias "de bien" se unieron a los policías y militares para ejercitarse en el tiro al blanco nocturno contra vagabundos, prostitutas y travestidos,

reivindicando la “limpieza social” con siglas como Amor por Medellín, Cali Limpia o Bogotá Linda.

Mientras crecía el terror institucional, se hundía en la ruina la política de Turbay. No solamente la de guerra sino también la de paz. Su propuesta de amnistía fue acogida solamente por cinco guerrilleros, y tres bombas de mortero que el Eme hizo caer al amanecer del 20 de julio de 1981 en el recinto del palacio presidencial, hiriendo a dos militares de la guardia personal de Turbay. Tras el atentado se endureció todavía más la represión. Fue entonces cuando Gabriel García Márquez abandonó el país por razones políticas.

Todos los candidatos a las elecciones presidenciales de 1982 prometieron la paz. El más convincente resultó el conservador Belisario Betancur. Las FARC aceptaron una tregua sin condiciones. El M-19 expresó su disponibilidad al diálogo “en el que se pacte un acuerdo patriótico por la apertura democrática y la justicia social”. Betancur adoptó medidas que parecían casi temerarias. Creó una Comisión de Paz que incluía, incluso, a representantes del Partido Comunista y concedió una amnistía que sacó de la cárcel a cientos de guerrilleros, entre ellos, al líder del M-19. El general Fernando Landazábal, nombrado hacía poco ministro de Defensa, protestó públicamente: “Cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene transformando sus derrotas en victorias de gran resonancia”.² Lo mismo opinaban exponentes de las grandes familias del país, que en más de una ocasión afirmaron que no entendían por qué se rebajaba a pactos con una guerrilla que se hallaba muy lejos de la toma del poder.

En octubre de 1982, Betancur invitó formalmente a la Procuraduría General, un organismo gubernamental de control de los funcionarios estatales, a llevar a cabo una investigación sobre el fenómeno paramilitar en Colombia, y sobre el MAS en particular. Un grupo de jueces trabajó durante tres meses en las regiones de mayor violencia. En el mes de febrero siguiente, el procurador general Carlos Jiménez Gómez hizo público un documento que acusaba a 163 personas de pertenencia al MAS, entre quienes se contaban 59 oficiales y militares en activo. Jiménez los definió como “oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan a tomar como guías e informantes, colaboradores y auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de

2. *El Tiempo*, 31 de octubre de 1982.

sicarios hagan oficiosamente lo que oficialmente no pueden hacer”.³ Aunque utilizando un lenguaje contorsionado, el sentido era clarísimo.

La respuesta del Estado fue furibunda pero compacta. El general Landazábal amenazó con un golpe de Estado. Según él, los militares “ante las perspectivas de desdoro de su dignidad, podrían disponer de su ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles”.⁴ La cúpula de las Fuerzas Armadas invitó a todos los militares, desde los generales hasta el último de los soldados, a devolver un día de paga para los gastos de defensa de los acusados. Una medida inútil, dado que el caso de los 59 investigados quedó en manos de la justicia militar y se le echó inmediatamente tierra encima. En los años siguientes, muchos oficiales que figuraban en aquella lista hicieron una carrera vertiginosa. El teniente coronel Álvaro Velandia pasó a dirigir el Binci, mientras que el coronel Ramón Emilio Gil fue enviado a Estados Unidos como adjunto militar de la embajada colombiana de Washington, para ser promovido posteriormente nada menos que a comandante de las Fuerzas Armadas.

Los políticos no fueron menos severos con la Procuraduría General. Los dirigentes de los partidos liberal y conservador emitieron un comunicado unitario solidarizándose con las Fuerzas Armadas. Igualmente hicieron las asociaciones de empresarios, industriales y agricultores. En un mensaje a la nación, Betancur aseguró que “las Fuerzas Armadas no utilizan fuerzas paramilitares, ni las necesitan. Su disciplina castrense está lejos de apelar a medios que no se ajusten a la Constitución, de la que son los mejores guardianes”. Ninguna voz se levantó para defender al procurador general y sus hombres, que se resignaron a actuar desde aquel momento como funcionarios timoratos de la llamada “procuraduría de opinión”. En febrero de 1983, el Estado colombiano demostró su legitimación del paramilitarismo adhiriéndose de hecho a la llamada de las 223 personas “de bien” lanzada sobre el estadio de Cali.

3. *El Espectador*, 20 febrero de 1983

4. *El Tiempo*, 20 de abril de 1983.